

SEÑOR JUEZ

JUZGADO ADMINISTRATIVO EN ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUGA REPARTO

FRANCISCO ERNESTO PEDROZA QUINTERO, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, mayor de edad, con domicilio, vecindad y residencia en la ciudad de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadanía No. 94.225.661 de Cali y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 184.304 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado judicial del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, mayor de edad, con domicilio y residencia en Cali Valle, identificado con la cédula de ciudadanía N° **5.119.575** Exp. En Pailitas Cesar, en calidad de titular de asignación de retiro de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en forma respetuosa elevo ante su Despacho, me permito interponer demanda para la iniciación de un proceso ordinario en ejercicio del **MEDIO DE CONTROL ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, en contra de **LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES "CREMIL"**, representada por el Mayor General **EDGAR CEBALLOS MENDOZA** o quien haga sus veces en las ausencias temporales o definitivas. Proceso en el que también deberá adelantarse con citación y audiencia del Ministerio Público, en el cual solicito se realicen las siguientes declaraciones o similares.

1. DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA: Declarar la nulidad de los Actos Administrativos expedidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, identificados como oficios **CREMIL 59464** y consecutivo 59800 de fecha 23 de noviembre de 2012, firmado por la Subdirectora de Prestaciones Sociales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Teniente Coronel (RA) **AMPARO PEÑARANDA RAMIREZ**. Acto administrativo que NEGÓ la petición del señor **EMIRO CRESPO CALERO**, mediante el cual solicitaba el reajuste y actualización de su asignación de retiro, así como el pago de las sumas de dineros dejadas de cancelar por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares "CREMIL" al no haber realizado el reajuste anual de la asignación de retiro de los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, conforme lo establece la Constitución Política de Colombia en el artículo 48 inciso 6° y el artículo 53 inciso 3°, desarrollados por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y autorizados por la Ley 238 de 1995.

SEGUNDA: Que una vez se profiera la nulidad de los actos administrativos acusados, con el fin de asegurar así la regularidad jurídica, se de protección directa al derecho subjetivo vulnerado o desconocido a mi representada; condenando a la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**, a reparar los perjuicios causados por el acto administrativo anulado, a favor del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, en la siguiente forma:

Reconociendo el valor de las sumas de dinero dejadas de cancelar por parte de la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**, en los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 por aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y este resultado como base para la liquidación de los aumentos a partir del trece de agosto de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004 de acuerdo al IPC, y a partir del 1 de enero de 2005 y años subsiguientes a saber 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 donde se aplica el Decreto 4433 de 2004, por no haber realizado "CREMIL", el reajuste anual de la asignación de retiro pensión del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, aplicando la prescripción cuatrienal que dispone el artículo 174 del decreto 1211 de 1990, ósea con obligación efectiva a pagar a partir del 18 de agosto de 2011 en razón al derecho de petición presentado el 18 de agosto de 2015, más la indexación de estas sumas de dinero, y los intereses legales, conforme lo establece la Constitución Política de Colombia en el artículo 48 inciso 6° y el artículo 53 inciso 3°, desarrollados por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y autorizados por la Ley 238 de 1995.; es decir, tomando como base el mismo valor porcentual que sirvió como incremento al IPC del año inmediatamente anterior.

Las sumas de dineros dejados de cancelar por parte de la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES "CREMIL"**, del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**

El pago de los valores que resulten de realizar los reajustes a la asignación de retiro del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, para los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 aplicándole el incremento más favorable entre el aumento salarial porcentual, o el índice de precios al consumidor IPC, que se aplica para los reajustes pensionales, o el pago de lo que resulte probado dentro del proceso.

TERCERA: Condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES “CREMIL” a realizar el pago de las sumas indicadas en el punto anterior en forma indexada como lo dispone el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, Código Contencioso administrativo, por tratarse de pagos de tracto sucesivo, para lo cual deberá aplicarse la fórmula de indexación mes por mes.

CUARTA: Condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES “CREMIL” a pagar los intereses de mora a la tasa máxima legal permitida por la Superintendencia Financiera conforme lo establece el artículo 884 del Código de Comercio, para cada uno de los incrementos no cancelados en forma mensual, desde la fecha en que se causó cada uno hasta la fecha del pago total de lo adeudado.

QUINTA: Condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES “CREMIL” a reajustar, actualizar y pagar la asignación de retiro mensual del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, al año 2015, para que hacia el futuro se le continúe cancelando la asignación de retiro mensual reajustada. Lo anterior por NO haber realizado la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES “CREMIL” el reajuste anual de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, hasta julio de 2003 conforme lo establece la Constitución Política de Colombia en el artículo 48 inciso 6º y el artículo 53 inciso 3º, desarrollados por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y autorizados por la Ley 238 de 1995. Esto es, aplicando al porcentaje de incremento más favorable entre el aumento salarial porcentual, o el índice de Precios al Consumidor IPC, que se aplica para los reajustes pensionales, o el pago de lo que resulte probado dentro del proceso.

SEXTA: Que a las anteriores declaraciones y condenas se les dé cumplimiento dentro de los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo.

SEPTIMA: CONDENA EN COSTAS, en el evento de ser favorable la sentencia a las pretensiones, solicitud su Señoría se dé cumplimiento a lo contemplado en el artículo 188 del C.P.A.C.A., donde manifiesta expresamente que salvo en los casos en que exista conflicto de interés general, en los demás casos Se condenará en costas y se liquidarán conforme a la establecido en el C.P.C.

OCTAVA: Ruego a Ud., Señor Juez, reconocermé personería dentro de los términos de este mandato.

2. HECHOS:

1. El señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, alcanzó el grado de **SARGENTO PRIMERO** del Ejército Nacional, fue retirado de la actividad militar el 31 de enero de 1980 por “Solicitud Propia”.
2. Al señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, se le ordena el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, mediante resolución Número 1327 del 06 de diciembre de 1979; por que cumplió con los requisitos para que se le fuera reconocida una pensión, por parte de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES “CREMIL”
3. La **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES “CREMIL”** le ha cancelado oportunamente las mesadas pensionales del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, desde la fecha de su asignación; realizándole el incremento anual de acuerdo al principio de oscilación consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990.

El principio de oscilación determina que las asignaciones de retiro y las pensiones que se tratan en dicho decreto se incrementarán teniendo en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado.

4. En aplicación de este principio de oscilación, del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, le ha sido incrementada su asignación de retiro de conformidad con los decretos que para tal efecto se establecen en la escala gradual porcentual. Esta escala es el mecanismo por medio del cual el gobierno Nacional establece cada año los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de policía nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4 de 1992.
5. En aplicación de los decretos mencionados y teniendo en cuenta el grado militar alcanzado por el señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, el cual es de **SARGENTO PRIMERO**, los incrementos a la pensión desde el año 1997 han sido:

PERIODO	DECRETO	INCREMENTO
DEL AÑO 1996 A 1997	122	21,38%
DEL AÑO 1997 A 1998	058	19,84%
DEL AÑO 1998 A 1999	062	14,91%
DEL AÑO 1999 A 2000	2724	9,23%
DEL AÑO 2000 A 2001	2737	5,85%
DEL AÑO 2001 A 2002	745	4,99%
DEL AÑO 2002 A 2003	3552	6,22%

6. El 03 de agosto de 2009 el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE BUGA VALLE, emitió sentencia a favor de mi representado, pero en dicho fallo la Sra. Juez en sus consideraciones en las premisas normativas y jurisprudenciales se acogió para su decisión lo dispuesto por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo con ponencia del Consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en sentencia del 31 de enero de 2008, con sentencia del Consejero Ponente GERARDO ARENAS MONSALVE, referencia 250002325000200700389 01, de acuerdo a las paginas 5, 6, 7, 8, y 9 de la sentencia del Juzgado y dice:

En el caso concreto de la sentencia del 03 de agosto de 2009 el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE BUGA VALLE, manifestó *“Como quiera que en el presente caso se debaten las mismas circunstancias de hecho y derecho que ya han sido definidas mediante las providencias atrás relacionadas, se declarara entonces la nulidad solicitada y se ordenara reajustar la asignación de retiro del actor dando aplicación a la ley 100 de 1993, por ser esta más favorable para el demandante, a partir 13 de Agosto del año 2003, en virtud de la prescripción cuatrienal establecida en el artículo 155 del Decreto 1212 de 1990, los derechos causadas antes de esta fecha se encuentran prescritos, lo anterior teniendo en cuenta que la petición para el efecto se llevó a cabo el 13 de agosto de 2007”*

En el resuelve de la sentencia del 03 de agosto de 2009 el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE BUGA VALLE, declaro *“SEGUNDO: CONDENASE a la CAJA DE RETURI DE LAS FUERZAS MILITARES a reajustar la asignación de retiro del Sargento Primero ® del Ejército HERNAN ANTONIO SOLANO SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 5.119.575 de Paillitas – Cesar dando aplicación a la ley 100 de 1993, por serle ésta más favorable, a partir del 13 de agosto del año 2003, en virtud de la prescripción cuatrienal establecida en el artículo 155 del decreto 1212 de 1990, conforme lo dispuesto en la parte motiva de la presente sentencia”*

Con el debido respecto el Despacho incurre en un yerro jurídico porque lo que prescribe son las mesadas no cobradas más no la liquidación que es imprescriptible y se puede reclamar en cualquier tiempo, liquidación que debe empezar en el año 1997 pero con obligación a pagar a partir del 13 de agosto de 2003 por la prescripción de las mesadas no cobradas en la fecha de dicha sentencia, al prescribir la liquidación le violo los derechos laborales a mi poderdante, yendo en contravía de las leyes y la jurisprudencia como es la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia del 21 de agosto de 2008, con sentencia del Consejero Ponente GERARDO ARENAS MONSALVE, referencia 25000232500020070038901 y demás pronunciamientos de las altas cortes como son Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia del 20 de febrero de 2009, con sentencia de la Consejera Ponente BERTHA LUCIA RAMIREZ PEREZ, referencia 25000232500020070060795401 (1614-2008), actor Gilberto Sánchez López; Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia del 26 de marzo de 2009, con sentencia del Consejero Ponente GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANJUREN, referencia 250002325000200700511 01 (2037-08) actor Rodrigo Osorio Bedoya; Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia del 16 de abril de 2009, con sentencia del Consejero Ponente VICTOR

HERNANDO ALVARADO ARDILA, referencia 250002325000200700476 01 (2048-08) actor Eugenio Gómez de Manrique; Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", en sentencia del 11 de junio de 2009, con sentencia del Consejero Ponente VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, referencia 250002325000200700718 01 (1091-08) actor Carlos Arturo Hernández Cabanzo, y muchas más hasta la fecha, hago referencias a estas sentencias porque son anteriores a la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo de Buga donde no se reconoció los derechos de mi poderdante.

7. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares por medio de oficios **CREMIL 73602 consecutivo 2015-62848 de fecha 04 de septiembre de 2015**, firmado por la Jefe Oficina Asesora de Jurídica (E) de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, NEGÓ la petición del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, bajo los siguientes argumentos: (anexo no. 1).

“En atención a su escrito radicado en esta Entidad con el N° 73602 del 18 de Agosto de 2015, mediante el cual usted en calidad de apoderado del señor SP (RA) EJC HERNAN SOLANO SANCHEZ solicita el reajuste de la asignación de Retiro con base en el I.P.C., previa revisión del expediente Administrativo me permito informar lo siguiente: (...)

(...)Como se puede evidenciar la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares dio estricto cumplimiento a lo ordenado en el fallo por el operador judicial, por lo que la Entidad no atiende favorablemente lo pretendido.(...)”

3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

En cuanto al procedimiento son aplicables los artículos 05, 10, 43, 93, 104, 138, 162, 163, 164, 165, de la Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo y demás normas concordantes. Igualmente es aplicable el artículo 90 de la Constitución Política sobre la responsabilidad patrimonial del estado.

1)- NORMAS VIOLADAS

Como disposiciones violadas cito las siguientes normas, entre otras, que serán explicadas detenidamente en el acápite del concepto de violación.

a. De la Constitución Política

preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 25, 42, 44, 46, 48 inciso 6°, 51, 52, 53, inciso 2° y 3°, 58, 90, 150 numeral 10, 220, 229 y 346.

b. Legales

Ley 100 de 1993: artículo 14 y 279 parágrafo 4°.

Ley 238 de 1995.

Decreto 1211 de 1990 artículo 169.

1.- La CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES “CREMIL”, tiene como objeto fundamental reconocer y pagar las asignaciones de retiro al personal de oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas militares, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, que se rige por las normas orgánicas del Decreto Ley 2342 de 1971, Decreto Ley 2002 de 1984, Ley 489 de 1998 y por las disposiciones de su estatuto interno (Acuerdo No. 008 del 31 de octubre de 2002).

2.- Los anteriores incrementos anuales solo tenían en cuenta el incremento que se le realizaba al personal de servicio activo con el grado de **SARGENTO PRIMERO**, sin tener en cuenta consideraciones económicas, legales o constitucionales aplicables al personal retirado de las fuerzas militares y mucho menos sin tener en cuenta a las personas de la tercera edad que gozan de asignación de retiro.

3.- Las normas constitucionales que no se tuvieron en cuenta por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para realizar el incremento a la asignación de retiro del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, son:

El inciso 6° del artículo 48 de la Constitución Política, el cual determina que:

“la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan el poder adquisitivo constante”; y el inciso 3° del artículo 53 de la Constitución Política, que le impone al estado la obligación de garantizar **“el derecho al pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones”**.

Tampoco se tuvo en cuenta por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al realizar los incrementos mencionados en el hecho número 5, la norma legal que desarrolló los principios Constitucionales mencionados en el hecho anterior.

Porque fue la Ley 100 de 1993 que estableció en su artículo 14 el reajuste de pensiones, dice la norma:

“Con el objeto de que las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustaran anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, rectificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior”.

- a. Es cierto que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación del artículo 14 de la misma ley a los miembros de las Fuerzas Militares, pero la Ley 238 de 1995 adicionó en forma clara y precisa que: “las excepciones consagradas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no implicaban la negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 establecidos en la misma ley, para los miembros de las fuerzas militares y de la policía nacional. Lo cual significa que a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993, si tienen derecho a que se les reajusten sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibídem.
- b. Por tanto, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares debió haber realizado los incrementos anuales de la pensión del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, esto es, con base en el IPC.
- c. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país. Los resultados son analizados por grupos, subgrupos y clases de gastos básicos y niveles de ingreso; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE – es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Y es el DANE quien cada año estima cual ha sido el porcentaje en que se ha afectado el IPC, este porcentaje es el que se le debe aplicar como incremento a las pensiones con el objeto de que no pierdan el poder adquisitivo constante, esto es, que el pensionado puede adquirir y consumir en el presente año los mismos bienes y servicios que adquirió y consumió el año anterior con el valor de su mesada pensional.
- d. Por ser el IPC un indicador de la economía resulta lógico su aplicación como factor porcentual en el incremento de las pensiones, no obstante por justicia y equidad a las pensiones se les debería aplicar el incremento que se le realiza al salario mínimo mensual, que se ajusta más a la realidad económica del país.

- e. Es evidente que la asignación de retiro es una verdadera pensión, desde la Constitución Política de 1886 a los reconocimientos periódicos que les hace el Estado a los retirados de las fuerzas militares se les denominó genéricamente PENSIONES (artículo 169) y que en la actual sucedió otro tanto (artículo 220) habiéndose ampliado los miembros de la fuerza pública (militares y policías).

“(sentencia de fecha 17 de mayo de 2007. Consejo de Estado Sección Segunda. M.P. Jaime Moreno García. Actor José Jaime Tirado Castañeda. Demandado Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional)”

La Corte Constitucional en Sentencia C- 941 del 15 de Octubre de 2003, en principio llegó a concluir que las asignaciones de retiro no son pensiones; criterio este que posteriormente fue rectificado mediante la sentencia C- 432 de 2004 al referirse a la naturaleza jurídica que tiene la **“asignación de retiro”** de los miembros de las fuerzas militares y de la policía nacional, expresa:

“Es una modalidad de presentación social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto grado de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del servicio y las funciones que cumplen los servidores a quienes se les reconoce. Se trata, como bien lo afirman los intervinientes, de establecer con la denominación de “asignación de retiro”, una pensión de vejez o jubilación para los miembros de la fuerza de la fuerza pública, en la medida que el resto del ordenamiento especial de dichos servidores públicos, se limita a regular las pensiones de invalidez y sobreviviente.

Un análisis histórico permite demostrar su naturaleza prestacional. Así, el artículo 112 del Decreto 501 de 1955, es inequívoco en establecer a la asignación mensual de retiro dentro del catálogo de prestaciones sociales a que tienen derecho los oficiales o suboficiales de la fuerza pública. En idéntico sentido, se reitera la naturaleza prestacional de dicha asignación, en los artículos 101 y subsiguientes del Decreto 3071 de 1968.”

4. CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Señor Juez sírvase tener como concepto de la violación todos los hechos narrados que dan cuenta de los argumentos no tenidos en cuenta por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para negarse a hacer el reajuste anual de la PENSION del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, con base en IPC y adicionalmente los siguientes:

El oficio expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares **CREMIL 73602 consecutivo 2015-62848 de fecha 04 de septiembre de 2015**, firmado por la Jefe Oficina Asesora de Jurídica (E) de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que NEGÓ la petición del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, violó normas superiores y está incurso en falsa motivación, toda vez que el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 1211 de 1990, consideró como históricamente lo venía haciendo, que el sistema de la oscilación era más favorable para salvaguardar los derechos de las personas que recibían asignaciones de retiro por haber sido miembros de las fuerzas militares; apreciación ceñida a la realidad en ese momento, y que cumplió su razón de ser hasta tanto cambiaron los patrones de referencia.

Solicito muy respetuosamente al Señor Juez se analice y tenga en cuenta que:

A.- El artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, define los actos definitivos: **“son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”**

B.- El Artículo 53 de la Constitución Política establece como garantía fundamental en materia laboral, el principio de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, el cual refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para todo trabajador tiene el derecho laboral.

De tal forma que las garantías establecidas en su favor, no pueden voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal, ser objeto de renuncia.

Lo anterior explica el carácter de orden público que ostentan las normas que regulan el trabajo humano, y el hecho de que los derechos y prerrogativas en ellos reconocidos se sustraigan a los postulados de la autonomía de la voluntad privada.

Así lo preceptúa el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, al señalar que: “las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables”.

Es indiscutible que la asignación de retiro, como prestación cumple un fin Constitucional determinado, que tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la fuerza pública, con un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus condiciones económicas por la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares.

Los miembros de la fuerza pública tienen derecho a un régimen prestacional especial, en razón al riesgo latente que envuelve la función pública que prestan y desarrollan.

(El artículo 217 señala que “(...) La Ley determinará el sistema de reemplazos en las fuerzas militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de la carrera, prestacional y disciplinario, que le es propio”.

Así mismo, el artículo 218, dispone: “(...) La Ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario “(subrayado por fuera del texto original).

Así, el artículo 217 de la Carta Fundamental, determina que las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden Constitucional. **(Entiéndase por fuerzas Militares: El ejército, la armada y la fuerza aérea (C.P. art. 216).**

Por su parte, el artículo 218 de la Constitución, le asigna a la policía nacional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Este régimen especial a partir del potencial riesgo que comportan sus funciones, tiene su origen no solo en la consagración expresa de los citados artículos de la Constitución, sino también en el mismo artículo 123 de la Carta Política que establece la diversidad de vínculos jurídicos que se presentan en el desarrollo de la función pública y que, en mayor o menos medida, con sujeción a lo previsto en el artículo 150 – 19 del mismo estatuto Superior, permite al legislador regular de diversa manera el régimen salarial, prestacional y de seguridad social de dichos servidores.

La Corte Constitucional, en diversas oportunidades, ha reconocido que la diversidad en el tratamiento prestacional de los miembros de la fuerza pública tiene su origen en la naturaleza riesgosa de las funciones que desarrollan y que, a su vez, cumple con el fin Constitucional de compensar el desgaste físico y mental que implica el estado latente de inseguridad al que se somete al militar y a los miembros de su familia durante largos períodos de tiempo. **(En sentencia C – 101 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Treviño).**

El carácter especial se contrapone a los calificativos excepcional y autónomo, en torno al ámbito de la aplicación de un régimen normativo en un determinado ordenamiento jurídico. Al establecer que el derecho excepcional es aquel régimen normativo que supone la existencia de otro – de mayor alcance y jerarquía – frente al cual se introduce derogaciones, subrogaciones o modificaciones jurídicas que dependen de sí mismas y se encuentran sujetas a sus propios principios generales.

Finalmente, es derecho especial aquel régimen normativo que sin llegar a ser autónomo es conjunto de disposiciones jurídicas que dependen de sí mismas y se encuentran sujetas a sus propios principios generales. Se puede entonces considerar que un régimen prestacional especial es aquel conjunto normativo que crea, regula, establece y desarrolla una serie o catálogo de prestaciones a favor de un grupo social determinado que, a pesar de tener su origen en un derecho generativo de mayor entidad, goza de una regulación propia, en virtud de ciertas características individuales que le dotan de plena singularidad.

En este contexto, como lo ha sostenido La Corte Constitucional, dicho tratamiento diferencial debe estar encaminado a mejorar las condiciones económicas del grupo humano al cual se aplica, por lo que resultan inequitativos, es decir, contrarios al principio de igualdad, “los regímenes especiales de seguridad social que introducen desmejoras o tratamientos de inferior categoría a los concedidos por el régimen general”

De lo expuesto podemos concluir que la existencia de prestaciones especiales a favor de los miembros de la fuerza pública, lejos de ser inconstitucionales, pretenden hacer efectivos los principios de igualdad material y equidad, a partir del establecimiento de unas mejores condiciones que permitan acceder a un régimen pensional más benéfico en tiempo en porcentajes o en derechos, en aras de equilibrar en desgaste físico y emocional sufrido durante un largo periodo de tiempo, por la prestación ininterrumpida de una función pública que envuelve un peligro inminente.

El objetivo del régimen especial no puede desbordar los límites para el cual fue creado, ni constituirse en una preferencia, pero tampoco puede estar por debajo de los privilegios que gozan las personas pertenecientes al régimen general. En cualquiera de los dos casos resulta constitucional real y efectiva o un agravio injustificado al militar retirado al no aplicársele el incremento a su pensión como lo ordena la Ley.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política en el año 1991, se introdujo el principio del incremento anual de la mesada pensional con el objetivo de que la misma no perdiera el poder adquisitivo constante.

Posteriormente con la expedición de la Ley 100 de 1993 el personal de las Fuerzas militares y la policía nacional fue excluido del sistema de seguridad social integrada, razón por la cual se expidió la Ley 238 de 1995, por medio de la cual se hizo salvedad en cuanto a la interpretación de esa disposición, argumentando que no se trataba de la negociación de los beneficios y derechos consagrados para los pensionados de dichos sectores.

A pesar de la claridad de la disposición que habilita el reajuste de las asignaciones de retiro en función del IPC, la administración continuó ignorando su alcance, argumentando que no se pueden realizar aumentos superiores a lo estipulado porque desbordaría los límites expuestos por el legislador, sin considerar que fue el mismo legislador quien al expedir la Ley 238 de 1995, cambió las reglas básicas para reajustar las pensiones del personal retirado de las fuerzas militares y la policía nacional.

El sistema de oscilación, consagrado en el artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, para el reajuste de las asignaciones de retiro o pensiones que tiene como referencia el monto de los salarios del personal activo, no puede seguir siendo aplicable a los reajustes anuales del personal retirado porque la utilización de dicho sistema deterioraría año por año la asignación del personal retirado de la fuerza pública.

Por último, si la razón para no dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 238 de 1995 respecto al reajuste de las asignaciones de retiro, consiste en entender que esta no es pensión quedo claro dentro de los hechos que para la Corte Constitucional y el Consejo de Estado la asignación e retiro es una verdadera pensión y por tanto se le debe aplicar el reajuste establecido en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

3. La Caja de Retiro de las fuerzas Militares en sus argumentaciones desconoce lo establecido en la Ley 238 de 1995 por medio de la cual los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional tienen derecho a que se les reajuste su asignación de retiro, la cual es una verdadera pensión según la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificados por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última. Desconoce también lo establecido en el inciso 6° del artículo 48 y el inciso 3° del artículo 53 de la Constitución Política.
4. El Consejo de Estado tratando el tema del régimen pensional de los miembros de la fuerza pública, en Sentencia de fecha 17 de mayo de 2007, sección Segunda. M.P. JAIME MORENO GARCÍA. Actor JOSÉ JAIME TIRADO CASTAÑEDA. Demandado Caja de Sueldos de Retiro de la policía Nacional, determinó:

“y la sala encuentra que la Ley 238 de 1995 es más favorable para el demandante que la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1212 de 1990, por que al hacer la comparación entre los reajustes pensionales derivados del aumento de las asignaciones en actividad de los oficiales de la policía nacional establecidos en los Decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002 y los que resultan de la aplicación de la Ley 100 de 1993 se evidencia que la aplicación de este sistema de reajuste resulta ser cuantitativamente superior.”

“En efecto, en el caso concreto la sala pudo establecer que al actor le resulta más favorable el reajuste de la pensión, con base en el IPC (Ley 100 de 1993)...”

“Los anteriores determina, además, que frente a los alegatos del acto acusado que enfrenta el sistema de reajustes de la oscilación de las asignaciones en actividad, que según la caja demandada debe prevalecer sobre el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el artículo 53 de la Constitución Política ordena darle preferencia a la norma más favorable, en la hipótesis de que llegare a haber en su aplicación, que para la sala no la hay, por lo dicho anteriormente”.

5. El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B tratando el tema del régimen pensional de los miembros de la fuerza pública, en Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2012 expediente 2500023250002010005111-01, M.P. GERARDO ARENAS MONSALVE. Actor CAMPO ELÍAS AHUMADA CONTRERAS. Demandado Caja de Sueldos de Retiro de la policía Nacional, determinó:

“En tales circunstancias, como ya quedó visto el ajuste de pensiones y asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública debe hacerse conforme al índice de precios al consumidor I.P.C., de que trata el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 14 y 142, por remisión expresa que hiciera el propio legislador en la Ley 238 de 1995....

Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que la Sala Plena de Sección ya había establecido en sentencia de 17 de mayo de 2007. Rad. 8464-2005. M.P. Jaime Moreno García que en el caso de los oficiales de la Fuerza Pública les resultaba más favorable el reajuste de su asignación de retiro, con aplicación del índice de precios al consumidor I.P.C., respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, tesis que de manera consistente y uniforme se ha venido reiterado la Sala,

para el caso concreto, dará por probado ese hecho y, en consecuencia, ordenará el ajuste de las asignaciones de retiro que el actor viene percibiendo, con fundamento en el índice de precios al consumidor, I.P.C., respecto del citado período, sin perjuicio del término prescriptivo....

No obstante lo expuesto, la Sala reitera que no puede perderse de vista que el reajuste al que tuvo derecho el actor, durante los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, en todo caso debe verse reflejado en la base de la asignación de retiro que viene percibiendo, la cual será incrementada a partir del 1 de enero de 2005 con fundamento en el principio de oscilación, previsto en el artículo 42 del decreto 4433 de 2004....

6. La aplicación de los criterios ha sido avalada por la Jurisprudencia entre otros: Fallo de fecha 1 de diciembre de 2005, expediente 04-5708 demandante Pedro Pablo Rodríguez Gutiérrez, demandado Caja de Retiro de la Policía Nacional, proferido en la Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, M.P. MARIA DEL CARMEN JARRÍN CERÓN.

Fallo del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B tratando el tema del régimen pensional de los miembros de la fuerza pública, en Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2012 expediente 2500023250002010005111-01, M.P. GERARDO ARENAS MONSALVE. Actor CAMPO ELÍAS AHUMADA CONTRERAS. Demandado Caja de Sueldos de Retiro de la policía Nacional, determinó:

Fallo de fecha 17 de noviembre de 2005, expediente 03-8967 demandante Roberto Pinzón Meléndez, demandado Caja de Retiro de la Policía Nacional, proferido en la Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, M.P. MARIA DEL CARMEN JARRÍN CERÓN. Fallo de fecha 17 de mayo de 2007, expediente número 05-8464 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, demandado Caja de Retiro de la Policía Nacional.

7. El artículo 43 de la Ley 1437 de 2011, define los actos definitivos: “son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”

El acto administrativo acusado no puede calificarse como acto de trámite como mal intencionadamente lo pretende la entidad demandada para tratar de poner más obstáculos al actor en su interés de acudir a la jurisdicción administrativa, en razón a que los derechos laborales son irrenunciables, y ninguna de las partes están facultadas u obligadas a conciliar estos derechos como reza en el Código Laboral y demás normas laborales y constitucionales, derecho refrendado por el Honorable Consejo de Estado por ser DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES.

8. Esta otra afirmación carece de todo fundamento, pues como lo he demostrado plenamente, el acto demandado es un acto definitivo que niega un derecho garantizado en la Constitución y establecido en la ley. Un acto de trámite no incide en la decisión que haya de tomarse, mira aspectos de puro procedimiento, pero es necesaria su expedición habida cuenta que en cada caso concreto debe cumplirse el procedimiento previsto por la ley para llegar a aquella. Pero, fácilmente se comprende que el acto impugnado no es de trámite porque en sí mismo no está destinado a propulsar ningún otro acto, como paso o etapa previos para alcanzar la decisión final de fondo.
9. Si la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares hubiera aplicado los fundamentos Constitucionales expresados en esta demanda, debió haber reconocido los incrementos anuales y reajustes correspondientes con base en el IPC, por tanto, dejó de incrementar la asignación de retiro en la diferencia que aparece para cada periodo en el siguiente cuadro:

PERIODO	DECRETO	INCREMENTO	IPC	DIFERENCIA
DEL AÑO 1996 A 1997	122	21.38%	21.63%	8,23%
DEL AÑO 1997 A 1998	058	19.84%	17.68%	-6,52%
DEL AÑO 1998 A 1999	062	14.91%	16.70%	1,79%
DEL AÑO 1999 A 2000	2724	9.23%	9.23%	-
DEL AÑO 2000 A 2001	2737	5.85%	8.75%	3,61%
DEL AÑO 2001 A 2002	745	4.99%	7.65%	2,72%
DEL AÑO 2002 A 2003	3552	6.22%	6,99%	1,38%

La no aplicación de los incrementos tiene también un efecto en el reajuste anual de los años subsiguientes.

10. La Caja manifiesta la prescripción cuatrienal no teniendo en cuenta:

El negarle al accionante el pago de las diferencias no pagadas e las mesadas desde el 01 de enero de 1997, es una violación directa de la Ley, las mesadas prescriben, pero las que han sido reconocidas mediante acto administrativo y no se hayan reclamado por negligencia del beneficiario, para el presente caso al actor, la entidad demandada no le ha reconocido este derecho.

De lo anterior se colige que el fenómeno prescriptivo para los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, es de periodo cuatrienal, Prescripción, que afecta solamente a las mesadas reconocidas y no reclamadas en tiempo, al tenor del artículo 174 del Decreto 1211 de 1990. Siendo que si hubiese aplicación de prescripción, esta sería de tipo cuatrienal y no afecta el derecho de **INDEXACIÓN**, sino el pago de las mesadas.

Pero acogiendo el principio Constitucional de favorabilidad de la Ley, la liquidación a la pensión del Actor, debe ser reconocida desde el 01 de enero de 1997 y pagada con indexación las diferencias existentes en las mesadas desde el 18 de agosto de 2011 hasta el 2015 o su pago, por la prescripción cuatrienal del Decreto 1211 de 1990 artículo 174.

Sobre la norma antes citada es bueno dejar presente que conforme a la manifestación tanto de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA como de la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL, sobre la prescripción del artículo 174 del decreto 1211 de 1990, solo prescriben los valores reconocidos y no reclamados por el acreedor, lo que no sucedió en el presente caso, por Cuanto el Estado, en Cabeza de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LAS FF.MM. “CREMIL”, no reconoció el derecho al reajuste anual de las pensiones conforme al I.P.C. certificado por el DANE.

Igualmente o prescribe el derecho a la indexación de las pensiones como está consagrada en la Constitución y la Ley; de acuerdo a la legislación colombiana vigente para el cumplimiento de la Ley, no se requiere agotar vía gubernativa, siendo que estos reajustes al Estado Social de Derecho en cabeza de la entidad accionada, deben efectuarlo de oficio, como es conocido la Caja de Retiro “CREMIL”, no reajustó en los años 1997 a 2003, la asignación de retiro o pensión al Actor; lo cual viene prevaricando por acción y omisión, al desconocer los derechos fundamentales de la Fuerza Pública.

El fenómeno prescriptivo para los miembros de las Fuerzas Militares, es de periodo cuatrienal, al tenor del artículo 174 de Decreto 1211 de 1990. En sentencia de septiembre 04 de 2008.

El Honorable Consejo de Estado, determinó que el Presidente de la República, al expedir el Decreto 4433 del 2004, excedió los términos de la Ley 923 de 2004

En consecuencia, la prescripción a aplicar es la establecida en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990. Sentencia proferida el 04 de septiembre de 2008, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, con Ponencia del Dr. Gustavo Eduardo G, Aranguren, dentro del proceso N° 25000232500200700107.

Igual pronunciamiento ante la prescripción cuatrienal El Honorable Consejo de Estado Sala Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B. CP. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, se pronunció en sentencia el 11 de junio de 2009 radicación N° 25000232500020070071801 Actor Carlos Arturo Hernández Cabanzo, Demandado Caja de Retiro de las Fuerzas Militares "CREMIL".

De lo anterior se desprende que aplicar la prescripción trienal del artículo 43 del Decreto 4433/2004, e igualmente aplicar la prescripción contenida en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, se constituye en una clara violación directa de la Ley.

Primero porque existe el pronunciamiento del HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, con relación a la no aplicación de la prescripción, por las razones expuestas en sus fallos, la aplicación de normas diferentes al régimen especial de estos servidores, tiene su fundamento legal, en que la persona de las Fuerzas Militares, pertenece a un régimen especial y están regidas por estatutos propios como el Decreto 1211 de 1990.

El artículo 14 de la Ley 100/93 dispone "Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del IPC, certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior".

A mi poderdante la Caja de Retiro de las FF.MM. "CREMIL", le adeuda el reajuste conforme al IPC certificado por el DANE, desde el 01 de enero de 1997.

Siendo este derecho parte de los derechos fundamentales, no requiere más formalismos para su reconocimiento que lo consagrado en el Canon 48 y 53 de la Constitución Política, de manera que no es procedente la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, ni la excepción de prescripción de derechos y por consiguiente la Caja de retiro debe reconocer y pagar el reajuste a la indexación de la asignación de retiro o pensión desde 1997, este derecho debe reconocerse de oficio, siguiendo el ordenamiento superior.

DERECHOS IMPRESCRIPTIBLES, como es la pensión por tratarse de prestaciones de trato sucesivo y reconocido por la accionada, igualmente el Decreto 1211 de 1990, en su artículo 174, no consagró la prescripción para la indexación de pensiones, y solo se refirió a la prescripción de las prestaciones unitarias de contenido patrimonial y las mesadas previstas por el decreto, es así como la sentencia C-298 de 2002, La Honorable Corte Constitucional consagró refiriéndose a la prescripción contenida en los estatutos de la Fuerza Pública.

Que “el término de la prescripción es aplicable con las prestaciones unitarias de contenido patrimonial y las mesadas pensionales previstas en cada decreto”

De lo anterior se colige que conforme al artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, prescriben las mesadas de las cuales no se puede hablar si Antes no se ha reconocido el derecho. Al actor e ningún acto administrativo la administración le ha reconocido la indexación de su pensión, razón por la cual ha tenido que acudir a la jurisdicción para obtener el reconocimiento de un derecho que el Gobierno en cabeza de la Caja de Retiro de las FF.MM. “CREMIL”, debe reconocerlo de oficio.

5. PRUEBAS

Comedidamente me permito solicitar se tengan y decreten las siguientes pruebas:

1. DOCUMENTALES

- Poder debidamente autenticado
- Copia auténtica de la Resolución No. 1327 del 06 de diciembre de 1979 por la cual se ordena el reconocimiento y pago de la asignación de retiro del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**.
- Acto Administrativo contenido en el oficio expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL 73602 y consecutivo 2015-628487 de fecha 04 de septiembre de 2015 por la cual NEGO el reajuste a la pensión del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**.
- Derecho de petición, para el agotamiento de la vía gubernativa de fecha 18 de agosto de 2015.
- Certificado CREMIL 60510 consecutivo 2015-46771 de fecha 09 de julio de 2015, en la cual certifica que el señor Sargento Primero (RA) del Ejército **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, que la última unidad donde laboro fue en el “BATALLON DE ARTILLERIA No 3 PALACE”, con jurisdicción en el Municipio de Buga Valle.
- Certificado CREMIL No. 60510 consecutivo 2015-46771 de fecha 09 de julio de 2015, en la cual certifica que el señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, donde certifica los incrementos anuales desde el año 1996 al año 2003.
- Copia de la Sentencia No. 128 de fecha 03 de agosto de dos mil nueve del Juzgado Segundo Administrativo del circuito judicial de Buga Valle.
- Copia de la resolución con la que se dio cumplimiento a la Sentencia No. 128 de fecha 03 de agosto de dos mil nueve del Juzgado Segundo Administrativo del circuito judicial de Buga Valle, por CREMIL Resolución No. 0457 de fecha 18 de febrero de 2010.

6. HECHOS NOTORIOS

Comedidamente solicito se tenga como prueba:

- Los decretos expedidos por el Gobierno Nacional a partir de enero de 1995, con fundamentos en la Ley 4 de 1992, mediante los cuales se ordena reajustar los sueldos básicos del personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo.
- Los datos que expide el DANE al certificar el índice de Precios al Consumidor, a partir del mes de enero de 1995, para los efectos de la aplicación de lo establecido por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, al tenor de lo dispuesto en la Ley 238 de 1995.
- Las jurisprudencias mencionadas en la demanda.

7. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Al no haber realizado la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares el incremento de la pensión conforme lo ordena el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 de conformidad con la Ley 238 de 1995, debe tenerse en cuenta la diferencia anual de cada año en que se debió aplicar el incremento y los reajustes que a futuro debió aplicar, así las cosas al señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, se le ha dejado de cancelar la suma de \$ 21.145.263 a agosto de 2015 sin sumar la indexación y los intereses.

	PORCENTAJE			INCREMENTO A		DIFERENCIA MENSUAL	DIFERENCIA ANUAL
AÑO	INCREMENTO	I.P.C AÑO	PAGO REALIZADO	REALIZAR	VR. A PAGAR	DEJADA DE PAGAR	DEJADA DE PAGAR
1996			\$685.848				
1997	21.38	21,63%	\$832.473	\$148.349	\$834.197		
1998	19.84	17,68%	\$997.646	\$165.505	\$999.702		
1999	14,91	16,70%	\$1.146.398	\$166.950	\$1.166.652		
2000	9,23	9,23%	\$1.252.209	\$107.682	\$1.274.334		
2001	5,85	8,75%	\$1.325.465	\$111.504	\$1.385.838		
2002	4,99	7,65%	\$1.391.602	\$106.017	\$1.491.855		
2003	6.22	6,99%	\$1.478.165	\$104.281	\$1.596.135		
2004	5,38	6,49%	\$1.557.693	\$103.589	\$1.699.724		
2005	5.5	5.5	\$1.643.365	\$93.485	\$1.793.209		
2006	5	5	\$1.725.534	\$89.660	\$1.882.870		
2007	4.5	4.5	\$1.803.184	\$84.729	\$1.967.599		
2007	prima de actividad	del 25% al 37.5%	\$1.929.134	\$245950	\$2.213.549		
2008	5.69	5.69	\$2.038.901	\$125.951	\$2.339.500		
2009	7.67	7.67	\$2.195.285	\$179.440	\$2.518.939		
2010	2	2	\$2.239.190	\$50.379	\$2.569.318		
2011	3.17	3.17	\$2.310.173	\$81.447	\$2.650.765	\$340.592	\$2.043.552
2012	5	5	\$2.425.681	\$132.538	\$2.783.304	\$357.623	\$5.006.722
2013	3.44	3.44	\$2.509.125	\$95.746	\$2.879.049	\$369.924	\$5.178.936
2014	2.94	2.94	\$2.582.893	\$84.644	\$2.963.693	\$380.800	\$5.331.200
2015	4,6	3.9	\$2.701.706	\$136.330	\$3.100.023	\$398.317	\$3.584.853
				TOTAL			\$21.145.263

La cantidad anterior es el resultado de la sumatoria de los incrementos dejados de cancelar a mi mandante y los reajustes pertinentes año por año, para tal efecto se tomó el dato de lo percibido por el señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, año por año y posteriormente se le aplicó el incremento correspondiente con base en el IPC a la mesada pensional del año inmediatamente anterior.

8. PROCEDIMIENTO A SEGUIR

El trámite a seguir para el presente proceso es el ordinario contencioso administrativo de que trata el Título XI, artículo 85 y ss., de la Ley 1437 de 2011, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

No se agota la conciliación prejudicial administrativa como requisito de procedibilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 1285 de 2009, por tratarse de un asunto de carácter no conciliable, en razón al Artículo 53 de la Constitución Política, que establece como garantía fundamental en materia laboral, el principio de irrenunciabilidad los principios mínimos establecidos en las normas laborales, de tal forma que las garantías establecidas en su favor, no pueden voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal ser objeto de renuncia.

Lo anterior explica el carácter de orden público que ostentan las normas que regulan el trabajo humano de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 14 Código Sustantivo del Trabajo.

En el caso que nos ocupa, la asignación de retiro, se asemeja a una verdadera pensión, y la solicitud de reconocimiento y pago de la misma conforme al IPC, no es asunto incierto ni discutible, por el contrario es un derecho cierto, no susceptible de ser conciliado, motivo por el cual no resulta procedente como requisito de procedibilidad la conciliación extrajudicial, prevista en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, conforme a la Sentencia de fecha once (11) de marzo de dos mil once (2011), proferida por el CONSEJO DE ESTADO – SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCION SEGUNDA, Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación Numero: 25000-23-25-000-2009-00130-01 (1563-09), que trata de un asunto con similares hechos y pretensiones a las que se debaten en este proceso.

9. COMPETENCIA

La competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades que la integran y se determina teniendo en cuenta factores universales que garantizan que el asunto debatido será conocido por el Juez más cercano a quienes aspiran a obtener su pronunciamiento.

Dichos factores han sido definidos como el objetivo: se determina en razón al principio de las dos instancias; territorial: a cada Juez o Tribunal se le asigna una jurisdicción territorial, es decir, un ámbito territorial para desatar los litigios que en ella surjan; y, de conexión: cuando en razón de la acumulación de una pretensión a otra, entre las que existe una conexión, un Juez que no es competente para conocer de ella puede llegar a serlo, por ser competente de la otra.

El Consejo de Estado ha tenido una posición **ERRADA** referente al factor de competencia territorial que se debe aplicar para las demandas que presentan los miembros en uso de buen retiro de la fuerza pública contra las Cajas de retiro que les cancelan sus asignaciones de retiro o mesadas pensionales; cual es, la aplicación del numeral 3º del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011 C.C.A. el cual señala que la competencia por razón del territorio en las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determina “**por el último lugar donde se prestaron o debieron prestar los servicios**”.

Posición errada por los siguientes motivos:

1. No se trata de un asunto laboral, por que como se puede observar la última entidad donde prestó los servicios del señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, fue en el EJERCITO NACIONAL, entidad que tiene jurisdicción en todo el territorio Colombiano, de acuerdo a las funciones constitucionales a ella asignadas, pero que cuenta con guarniciones militares estratégicamente ubicadas en donde deben estar acantonados los integrantes de la misma, el hecho de que en el momento del retiro se encuentre en una u otra guarnición militar es fortuito.

2. Esta demanda trata un asunto de seguridad social contra el fondo que administra los dineros con las cuales se les cancelan las pensiones a los militares retirados, es decir, una entidad que se asimila a las entidades del sistema de seguridad social.
3. por tanto el factor de competencia especial sería el lugar donde se expidió el acto, o en el domicilio del demandante siempre y cuando que la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares es un establecimiento público del orden nacional, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. pero por disposición del Consejo Directivo puede establecer dependencias en otras secciones del país. No obstante no tener oficinas en los otros departamentos y municipios distintos a Bogotá D.C. la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares atiende las demandas que contra ella presentan en cualquier lugar del país
4. Las demandas instauradas en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por lo regular, son presentadas por personas de la tercera edad, que salieron del servicio activo militar hace muchos años en una ciudad distinta a la que actualmente residen; imponerle la obligación de reclamar sus derechos en otro lugar diferente al de su domicilio en donde reciben actualmente su asignación de retiro, es negarles el acceso a la administración de justicia y sin duda se están afectando los derechos de las personas de la tercera edad; vulnerando lo establecido en los artículos 13 y 46 de la Constitución Política, los cuales le imponen al estado, por una parte, el deber de brindar una protección especial:

“a aquellas personas que por una parte, el deber de brindar una protección especial “a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”, y por la otra, la obligación de concurrir, con la colaboración de la sociedad y la familia, a “la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad...”.

En este orden de ideas la jurisdicción contencioso administrativa al aplicar como factor de competencia el establecido en el numeral 3º del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011 C.C.A. coarta el libre acceso a la administración de justicia por parte de los militares en uso de buen retiro, debiéndose aplicar entonces el factor general de competencia que determina el domicilio del administrado, como el lugar donde se deben instaurar las demandas, cuando estas se presentan en contra de una entidad del orden nacional.

De lógico razonamiento resulta, porque si se le compara con una persona civil que trabajó toda su vida en la empresa privada con domicilio en Bucaramanga, quien se encuentra pensionada por el Instituto de Seguros Sociales, presentaría una demanda que tenga que ver con su pensión contra el Instituto de Seguros sociales en el domicilio en que él se encuentre recibiendo si mesada pensional.

De acuerdo a la información suministrada por el señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, la última unidad militar en donde prestó sus servicios fue en el “BATALLON DE ARTILLERIA N° 3 PALACE”, de guarnición en el Municipio de Buga Valle.

10. ANEXOS

Se anexa una copia de la demanda para el Ministerio Publico, una copia para el traslado a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, una copia para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y una copia para el archivo del Tribunal.

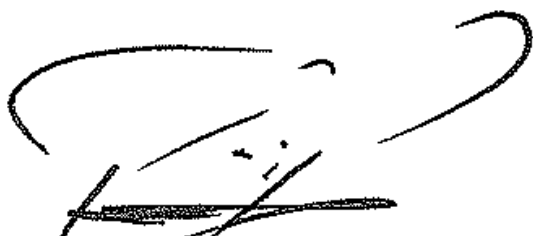
Igualmente se adjuntan los documentos relacionados en el acápite de las pruebas.

11. NOTIFICACIONES

Para los efectos del artículo 196 y ss. De la Ley 1437 de 2011, C.C.A., notifíquese:

1. Al señor Agente del Ministerio Público.
2. A la defensoría del Estado. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - Carrera 7 No. 75-66 piso 2 y 3 Bogotá. D.C., Colombia - PBX: (57-1) 255 89 55. Email conciliaextrajudicial@defensajuridica.gov.co.
3. Al representante de la parte demandada, Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en la Cra 13 No. 27- 00 Edificio Bochica Piso 2, PBX 353 73 00, de Bogotá D.C. en la página web: www.cremil.gov.co y en el correo electrónico direccion@cremil.gov.co y juridica@cremil.gov.co
4. Al señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ** y las mías, En cumplimiento al artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, respetuosamente me permito expresar al honorable despacho que acepto la notificación de las providencias a través de medios electrónicos a los correos friscoer@hotmail.com y en la AV. 3 Norte # 8 N 24 oficina 315 Edificio Centenario I, Ce. 3154119105 Cali – Valle.
5. Al señor **HERNAN SOLANO SANCHEZ**, en la Carrera 1 D bis No. 62 A – 02 en el Municipio de Cali Valle.

Señor Juez, Con el debido respeto;



FRANCISCO ERNESTO PEDROZA QUINTERO

C.C. No. 94.225.661 de Zarzal (Valle)

T.P. No. 184.304 del C. S. de la J.